

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio No. 329

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2020-00084-00
DEMANDANTE:	EMMA MALDONADO HINCAPIE
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

I. ASUNTO A DECIDIR

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición interpuesto por la entidad ejecutada, contra el auto interlocutorio No. 865 del 10 de septiembre de 2020, a través del cual se libró mandamiento de pago.

2. CONSIDERACIONES

De conformidad con lo previsto en el artículo 430 del Código General del Proceso¹, aplicable por expresa remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición que se interponga en contra del mandamiento de pago.

En virtud de lo anterior, se tiene que la apoderada judicial del municipio de Santiago de Cali, interpuso recurso de reposición contra el auto No. 865 del 10 de septiembre de 2020, por medio del cual se libró mandamiento de pago a favor de la señora Emma Maldonado Hincapié, por las siguientes sumas de dinero: i) por la suma de \$4.844.685, por concepto de capital correspondiente a la condena de prima de servicios, ii) por la suma de \$ 219.706, por concepto de capital correspondiente a la condena en costas efectuada dentro del proceso ordinario y, iii) por los intereses moratorios causados sobre las sumas de dinero antes referida, a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y hasta el día que se realice el pago efectivo de la obligación, los cuales se tasarán de acuerdo a lo ordenado en la sentencia.

¹ **ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO.** Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal. Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.

Del recurso interpuesto en forma oportuna se corrió traslado el 23 de septiembre de 2020, sin que la parte ejecutante se haya pronunciado al respecto.

Como sustento del recurso de alzada, la representante judicial del municipio de Santiago de Cali argumentó en primer lugar, que con las sentencias presentadas como título ejecutivo no se acompañó acto administrativo expedido por la entidad territorial, a través del cual se liquide y se calcule la correspondiente obligación, por lo que señala que al tratarse de un título ejecutivo complejo se debe analizar en conjunto todos los documentos que lo integran para librar o no mandamiento de pago.

Y en segundo lugar, expuso que la obligación no es clara, dado que la entidad obligada a los pagos que se reclaman por concepto de prima de servicios le corresponden a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y no al ente territorial ejecutado. Seguidamente, refirió que dentro del proceso ordinario adelantado por la señora Emma Maldonado Hincapié, no se condenó al municipio de Santiago de Cali para que concorra en el pago de la obligación, pues dicho ente territorial únicamente le corresponde proferir el acto administrativo de cumplimiento para efectos de constituir el título complejo.

Una vez analizados los argumentos antes expuestos, el Despacho considera que no hay lugar a revocar el mandamiento de pago librado, por las razones que pasan a exponerse:

En el presente asunto, el despacho procedió a librar mandamiento de pago con fundamento en el título ejecutivo conformado por los siguientes documentos aportados por la parte ejecutante: i) la sentencia de primera instancia proferida por este Juzgado el 23 de abril de 2014, por la cual se accedió a las pretensiones de la demanda ordenándose el reconocimiento y pago de la prima de servicios de que trata el decreto 1042 de 1978, a favor de la señora Emma Maldonado Hincapié, ii) la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 31 de marzo de 2016, por medio de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia y, iii) el auto fechado el 21 de junio de 2017, por medio del cual se aprobó la liquidación de costas por la suma de \$219.706.

Atendiendo lo anterior, es claro que el título presentado como base del recaudo corresponde a un **título ejecutivo simple**, tal como se indicó en la parte considerativa del auto por medio del cual se libró mandamiento de pago, en razón a que la entidad territorial ejecutada a la fecha no ha acreditado el cumplimiento a las sentencias fechadas el 23 de abril de 2014 y 31 de marzo de 2016, por lo que no puede exigirse la conformación de un título complejo al no existir en el mundo jurídico el acto administrativo expedido por la entidad territorial ejecutada liquidando o calculando la obligación que aquí se pretende ejecutar.

En efecto, se reitera que, en tratándose de títulos ejecutivos, el Honorable Consejo de Estado ha expresado que éstos pueden ser simples, cuando la obligación se consagra en un sólo documento, o complejo, cuando el mismo lo constituyen varios documentos, como sucede por regla general con el cobro ejecutivo de obligaciones derivadas de contratos administrativos o sentencias judiciales, en las cuales, el título

generalmente lo conforma la providencia o el contrato respectivo, así como otros legajos².

De esta manera, es importante indicar que cuando la obligación se encuentra contenida en una decisión judicial, generalmente el título ejecutivo es complejo, ya que estará conformado por la copia auténtica de la sentencia, con las respectivas constancias de notificación y ejecutoria, **y por el acto administrativo con el que la Administración pretende dar cumplimiento a lo ordenado en ésta**³; evento en el cual, la demanda ejecutiva se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta, no obstante, el Honorable Consejo de Estado ha indicado que, **excepcionalmente el título ejecutivo será simple, cuando el mismo lo constituye únicamente la sentencia, al no haberse dado cumplimiento a la misma**⁴.

Al respecto, el Alto Tribunal⁵ ha expuesto lo siguiente:

*“El título ejecutivo que habilita la ejecución forzada puede ser simple o complejo, según la forma en que se constituya. Es simple cuando la obligación consta en un solo documento del que se deriva la obligación clara, expresa y exigible. Y es complejo cuando la obligación consta en varios documentos que constituyen una unidad jurídica, en cuanto no pueden hacerse valer como título ejecutivo por separado. Por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. **Por excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez.** En el último caso, la acción ejecutiva se promueve porque la sentencia del juez no fue cumplida.”* (Negrilla del Despacho)

En este contexto, no existe duda de que en el caso *sub-examine* se está frente a un título ejecutivo simple, el cual está integrado por la sentencia de primera instancia fechada el 23 de abril de 2014, la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 31 de marzo de 2016 y, por el auto fechado el 21 de junio de 2017, a través del cual este Juzgado aprobó la liquidación de costas.

Debe advertirse que no resulta procedente exigir a la parte ejecutante que conforme un título ejecutivo complejo, tal como se argumenta en el recurso de alzada, pues la expedición de un acto administrativo de cumplimiento al fallo judicial objeto de estudio, es una actuación que le corresponde única y exclusivamente al ente territorial ejecutado y corresponde a un procedimiento interno en el cual no tiene injerencia alguna la parte ejecutante.

² Consejo de Estado, Sección Tercera, Providencia del 1 de octubre de 2008, Expediente No. 26.706, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

³ Consejo de Estado, Sección Cuarta, Providencia del 26 de febrero de 2014, Expediente No. 19250, Consejera Ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

⁴ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 02 de abril de 2014, Expediente No. 1002-14, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

⁵ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, Providencia del 17 de marzo de 2014, Expediente No. 0545-14, Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

En síntesis, resulta necesario reiterar que estamos frente a un título ejecutivo simple contenido en una sentencia judicial, ya que en el libelo introductorio el apoderado judicial de la parte ejecutante, afirma que a la fecha de interposición de esta demanda ejecutiva, la entidad ejecutada no ha proferido el acto administrativo correspondiente para dar cumplimiento a los fallos judiciales proferidos los días 23 de abril de 2014 y 31 de marzo de 2016 y, por su parte, la representante judicial del municipio de Santiago de Cali, en su contestación de la demanda ejecutiva y en el respectivo recurso de reposición, tampoco refirió la existencia del acto administrativo de cumplimiento a dichos fallos judiciales.

Por otro lado, debe indicarse que no hay lugar a considerar que la entidad territorial ejecutada no se encuentra legitimada para conformar el extremo pasivo del litigio, toda vez que al revisarse en su integridad el título base de ejecución se encuentra que mediante sentencia proferida en primera instancia por este Estrado judicial el 23 de abril de 2014, se condenó en el numeral 3° al municipio de Santiago de Cali a reconocer y pagar a favor de la señora Emma Maldonado Hincapié, la prima de servicios de que trata el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, a partir del 26 de septiembre de 2009, por prescripción trienal y hasta el 04 de enero de 2013, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la sentencia No. 101 del 31 de marzo de 2016.

En el título base de recaudo se evidencia que la orden de reconocimiento y pago se le atribuyó únicamente al municipio de Santiago de Cali, sin que se avizore obligación alguna a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que tampoco se observa que haya hecho parte del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 760013333001-2013-00220-00. Aquí, se resalta que dentro del proceso ordinario el municipio de Santiago de Cali no formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y el respectivo recurso de apelación no tuvo fundamento alguno en tal aspecto.

A partir de lo expuesto, el Despacho considera que no hay lugar a revocar el auto por medio del cual se libró mandamiento de pago, toda vez que el título ejecutivo simple presentado como base del recaudo contiene una obligación inequívoca, expresa y exigible y, está integrado en debida forma por la sentencia de primera instancia fechada el 23 de abril de 2014, la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 31 de marzo de 2016 y, por el auto fechado el 21 de junio de 2017, a través del cual este Juzgado aprobó la liquidación de costas; amén de que dicho título contiene una obligación clara a cargo del municipio de Santiago de Cali.

En consecuencia, el **Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali,**

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER para revocar el auto interlocutorio No. 865 del 10 de septiembre de 2020, por medio del cual se libró mandamiento de pago a favor de la señora EMMA MALDONADO HINCAPIE, en contra del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez en firme esta decisión, continúese con el trámite procesal pertinente.

TERCERO: RECONOCER PERSONERIA adjetiva a la doctora ROCCY STEFANNY LATORRE PERLAZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.113.643.371 y Tarjeta Profesional No. 221.391 del C.S. de la J., para actuar en representación de la entidad ejecutada, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, conforme al memorial poder y los anexos allegados a través de los canales digitales del Juzgado, documentación que se incorpora al expediente electrónico del proceso.

CUARTO: De conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 46 de la ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la ley 1437 de 20116, se ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES que deben enviar un ejemplar de los memoriales presentados, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

QUINTO: Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

⁶ Consagra el inciso segundo del artículo 186 de la ley 2080 de 2021, en su parte final que “Las partes y sus apoderados... “darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso”.

El numeral 14 del artículo 78 del CGP, estipula lo siguiente: “ART. 78. Deberes de las partes y sus apoderados:“(...) 14. Enviar a las demás partes del proceso después de notificadas, cuando hubieren suministrado una dirección de correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se exceptúa la petición de medidas cautelares. Este deber se cumplirá a más tardar el día siguiente a la presentación del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuación, pero la parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa hasta por un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracción”.

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

**Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11**

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ**

Firmado Por:

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ
JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE CALI-
VALLE DEL CAUCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

54ab49b251ca93a2be678d22a567feb91043c53ee7f77eeb8d07a423d2ccd14b

Documento generado en 16/07/2021 09:52:04 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**